

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ISLAS BALEARES

(SEGUNDO SEMESTRE 2024)

—

DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A ILLES BALEARS

(SEGON SEMESTRE 2024)

JOSEP MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Jefe de Servicio Jurídico de Ordenación del Territorio

*Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras. Consejo Insular de
Mallorca*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA. 2.1. Proyectos de ley en proceso de elaboración. 2.2. Ley en debate parlamentario. III. POLÍTICA DE ESPACIOS NATURALES. 3.1. Proyectos de ordenación de espacios naturales que decaen. 3.2. Nuevos instrumentos de ordenación en proceso de elaboración y tramitación. IV. OTRAS POLÍTICAS AMBIENTALES. 4.1. Políticas de aguas y litoral. 4.2. Actividades contaminantes. 4.3. Cambio climático y energía. 4.4. Gestión forestal.

I. INTRODUCCIÓN

El pasado verano han aflorado algunos problemas de trasfondo social derivados del modelo económico balear basado en el monocultivo turístico de masas. Los impactos sobre la cotidianeidad de los habitantes de las islas, que se ve alterada por la dificultad de convivencia por un ecosistema económico que requiere batir año tras año nuevos records de visitantes, comienza a asfixiar al residente. Igualmente, ya es una constatación el impacto del turismo que nos empobrece, dificultando el acceso a una vivienda digna en condiciones económicas asumibles. Por otra parte, empieza a cuestionarse la viabilidad de una normal convivencia con la masificación y la saturación del entorno cotidiano, el impacto sobre el coste de la vida y sobre nuestro medio y sus recursos. Del mismo modo, se está evidenciando la insuficiencia de

infraestructuras, dado que su nivel de servicio empieza a ser escandalosamente bajo, con vías de comunicación insuficientes, falta de una red de transporte público eficiente, depuradoras que se desbordan o la calidad del agua de consumo humano que se encuentra en muchos casos fuera de la aptitud para tal consumo. Todos estos problemas acumulados han disparado la sensación de que alguna cosa no funciona con este modelo de monocultivo turístico, que empobrece a la población residente, con un impacto negativo sobre el producto interior bruto (PIB) por habitante y una disminución del salario medio y una precarización a largo plazo, donde, además, se dispara el número de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social.

Se ha hablado de *turismofobia*, cuando el malestar no se ha proyectado contra el turista sino contra la incapacidad de los sucesivos gobiernos para diversificar la economía y controlar la sangría de jóvenes que, decepcionados y sin futuro, emigran en busca de oportunidades adecuadas a sus capacitaciones.

En todas las islas se han sucedido diversas acciones populares y manifestaciones, tanto en Menorca como en Mallorca o Ibiza, con dos concentraciones masivas en Palma en las que decenas de miles de personas proyectaban su malestar y reclamaban el tan ansiado cambio de modelo económico que habría de acabar con la obsolescencia del monocultivo turístico en un mundo cada vez más globalizado y tecnificado, en unas islas en el que casi todo se apuesta a la casilla del sector servicios con el turismo en el eje del sistema.

Las movilizaciones contra la saturación turística y a favor del decrecimiento no han hecho más que comenzar, mientras que la Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, no está mostrando una utilidad práctica real ni se espera que la tenga, tal y como denuncian el Fórum de la Sociedad Civil y las entidades ecologistas de las islas, como el GOB o Amics de la Terra.

En este contexto, las respuestas a estos problemas solamente parecen venir de unos textos que retroceden en cuanto a la protección y conservación ambiental: como el anteproyecto de ley de gestión integral del litoral de les Illes

Balears, el anteproyecto de nueva ley agraria o el Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, que se tramita ahora como proyecto de Ley en el Parlamento de las Illes Balears.

El horizonte de nuestro futuro próximo plantea una incertidumbre representada por el abandono de medidas de protección ambiental que, como veremos en el caso de la protección de espacios naturales, todo apunta a una relajación normativa en los diferentes planes de ordenación y de gestión; precisamente, las medidas de desprotección territorial, probablemente, sean las más llamativas, como iremos viendo a lo largo de las páginas de esta crónica, que pasamos a desgranar con más detalle.

II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA

2.1. Proyectos de ley en proceso de elaboración.

En materia ambiental o incidente con la misma, se encuentran en tramitación diferentes propuestas de textos normativo. La primera de ellas sería el *anteproyecto de ley agraria de las Illes Balears*, que se expuso al público en fase de consulta pública previa entre el 1 de agosto de 2024 y el 1 de octubre de 2024.

La memoria justificativa de la iniciativa expone que con este nuevo texto se pretende instrumentalizar la ordenación general de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y forestal, y el desarrollo rural de las Illes Balears, desde el reconocimiento de su carácter estratégico y multifuncional, en el marco de la política agraria común europea y la legislación del Estado. Igualmente, entre los objetivos de la propuesta se encontrarían: prever un régimen ordenado y claro de los derechos y las obligaciones del sector agrario insular; reconocer el carácter estratégico de la actividad agraria, atribuyéndole la importancia que tiene que tener no sólo como actividad productiva sino también desde las vertientes social, territorial, paisajística, medioambiental y cultural; y prever su carácter de actividad económica, por lo cual tiene que tener garantizadas la rentabilidad, la viabilidad y la continuidad en el tiempo.

De la memoria puede destacarse el objetivo de «proyectar una mejora agraria en nuestras Islas Baleares mediante la promoción de inversiones en el desarrollo de técnicas agrarias sostenibles, infraestructuras rurales, sistemas de aprovechamiento de agua y organización del mercado local, entre otros de otras iniciativas tendentes a la programación de una actividad agraria más sostenible, con la contribución de programas de investigación y tecnología».

La sostenibilidad propuesta se enraíza en la triple dimensión de la misma: la social, la económica y la ambiental, lo que se objetiva bajo la propuesta de lograr una actividad agraria rentable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. No obstante, del listado de objetivos, priman más los de carácter económico y social que los que podrían tener dimensión ambiental. Por extraer algunos que ilustran la anterior afirmación se podrían destacar los siguientes:

- Contribuir al desarrollo ordenado de la economía, consumiendo, la agricultura, productos de la industria, y facilitando que las producciones agrarias locales tengan presencia en las otras actividades económicas que se desarrollan en nuestras Islas Baleares.
- Favorecer y garantizar la rentabilidad de la actividad agraria, con la generación de ingresos consecuente que contribuya a la elevación del nivel de vida de las personas que se dedican, y, por lo tanto, dar estabilidad, continuidad y futuro a la empresa agraria.
- Potenciar las sinergias entre el sector turístico y la actividad agraria, de forma que las producciones agrarias de las islas tengan garantizada una cuota de mercado en la actividad turística.
- Consolidar y mejorar la ocupación de los agentes consagrados a la actividad agraria, mediante los mecanismos de instrucción, formación, asistencia técnica y fomento del asociacionismo profesional.
- Arbitrar los mecanismos que permitan las actividades complementarias, sin olvidar la actividad agraria como eje principal de la actividad, que complementen las rentas agrarias y garanticen la viabilidad y la continuidad de la actividad agraria.
- Asegurar que las explotaciones agrarias de las Islas Baleares tienen al alcance todas las oportunidades de negocio que les reconoce la normativa comunitaria.

La segunda iniciativa legislativa a destacar sería la del *proyecto de ley de gestión integral del litoral de las Illes Balears*, que ha superado el trámite de exposición pública, y que cuenta con un borrador del proyecto de ley. En el trámite ya se ha publicado la memoria de análisis de impacto normativo de tal forma que una vez aprobado como proyecto será enviado ante el Parlamento para su tramitación.

En la exposición de motivos del proyecto, ya se destaca la importancia de las costas en nuestro país y, más concretamente, en el archipiélago, que cuenta con 937 kilómetros de costa. Esta importancia es multidimensional, pues cuenta con perspectivas diversas que van desde el interés económico, al militar, pasando por el papel ecológico de las mismas. En el caso de las Illes Balears, el fenómeno turístico añade una variable en cuanto al valor de la costa: los terrenos costeros adquieren un especial valor al asociarse el turismo con el sol y la playa.

La exposición de motivos nos recuerda que el Real Decreto 994/2022, de 29 de noviembre, establece que se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears un conjunto de funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral que venía desempeñando la Administración del Estado, consistentes en: autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial, autorizaciones de actividades en que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles, la gestión y otorgamiento de autorizaciones en la zona de servidumbre de tránsito y acceso al mar, así como la gestión de las concesiones demaniales, y la planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que no sean de interés general del Estado.

Por todo ello, es razonable que una vez producido el traspaso proceda la aprobación de una ley de ordenación y gestión integral del litoral de las Illes Balears que, recoja las previsiones constitucionales y estatutarias, así como las señaladas en el Real Decreto 994/2022, y que regulen la protección, la ordenación y la gestión del litoral de las Illes Balears, con las particularidades y especialidades que sean legalmente aplicables.

En cuanto al contenido, el borrador del proyecto de ley cuenta con 69 artículos, cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria (que afecta a la Ley 3/2023, de Menorca Reserva de la Biosfera), y tres disposiciones finales.

El título preliminar, relativo a las disposiciones generales, aborda, en su capítulo I, el objeto de la ley, que no es otro que regular la ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears, y se refiere a su ámbito de aplicación que comprende, en el ámbito terrestre, el dominio público, las distintas servidumbres y la zona de influencia; y en el ámbito marino, no solo la zona marítima de baño sino también las aguas costeras definidas en la legislación estatal de aguas y el límite exterior del mar territorial. En su capítulo II, se regulan de manera ordenada los principios de la ordenación y gestión del litoral, en el ámbito de las relaciones interadministrativas, así como los principios de gestión integrada del litoral, enfoque ecosistemático, incluyendo los principios comunitarios en materia de política ambiental, de acceso a la información, transparencia y participación y el de protección del patrimonio litoral tradicional.

El título I, aborda los principios generales y las directrices de coordinación en materia de ordenación del litoral, incluyendo los instrumentos de ordenación del litoral, y se estructura en seis capítulos, que regulan desde los principios generales y directrices de coordinación en materia de ordenación del litoral hasta los distintos instrumentos de ordenación del litoral y los criterios y directrices generales de distribución y explotación de las actividades y servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre. Igualmente se regulan los Planes de Ordenación de Litoral; refiriéndose a su objeto, naturaleza jurídica, ámbito territorial y contenido material mínimo, señalando que su naturaleza jurídica es la de los planes directores sectoriales previstos y regulados en la legislación de ordenación territorial y que su ámbito será insular salvo que el Consejo Insular estime que procede otro ámbito.

El título II, trata el Patrimonio litoral, regulando lo que se ha denominado patrimonio litoral tradicional, así como el patrimonio litoral autonómico. Mientras que el título III tiene por objeto la Planificación, elaboración, aprobación, gestión y ejecución de obras en el litoral de las Illes Balears, y distingue las obras de

interés general del Estado, las obras que no son de interés general del Estado y las obras de competencia conjunta de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El título IV se articula en cinco capítulos, que tratan el régimen general de uso y utilización del litoral, estableciendo unos criterios generales y la distinción de distintos usos, garantizando el acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana, previendo el rescate, revocación y modificación de concesiones y autorizaciones. Igualmente, se aborda la catalogación de las Playas, distinguiendo entre los tramos de playas urbanas y naturales, así como las peri-urbanas y de protección especial, además del régimen de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. Finalmente, en este título, también se regulan las actividades y ocupaciones sujetas a autorización administrativa, de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 994/2022.

El título V, trata del régimen económico-financiero en el dominio público marítimo-terrestre, y contiene tres previsiones: la primera relativa a que la Comunidad Autónoma puede crear el canon autonómico por explotación de actividades lucrativas en el demanio que han sido objeto de concesión o autorización; la segunda relativa a las tasas que se regularán por la legislación sobre régimen específico de las tasas de la Comunidad Autónoma y; la tercera la que concierne al régimen económico de la prestación de servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre.

El título VI, establece que la ordenación y gestión del litoral es una competencia compartida entre el Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, los Consejos Insulares y los Municipios. Finalmente, el título VII desarrolla la potestad sancionadora, regulando la inspección del litoral, con las competencias de las distintas administraciones públicas y de los funcionarios con competencias inspectoras y a sus facultades, los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Como afirma la exposición de motivos, la ley incluye tres disposiciones transitorias relativas a las atribuciones y funciones de la consejería competente en materia de costas y litoral del Gobierno de las Illes Balears, en relación a la

ordenación del litoral, hasta que no se lleven a cabo, de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, las transferencias efectivas a los Consejos Insulares, a través de la Comisión Mixta de Transferencias. En segundo lugar, se prevé la catalogación provisional de las playas, y finalmente, el régimen transitorio relativo a la vigencia de disposiciones reglamentarias hasta que no se produzca la transferencia efectiva de competencias a los Consejos Insulares en materia de ordenación del litoral y hasta que, una vez transferidas efectivamente, los Consejos Insulares aprueben los Instrumentos de ordenación del litoral, como son los planes de ordenación del litoral y planes de actividades y servicios de temporada en dominio público marítimo-terrestre.

Igualmente, como se ha avanzado en la introducción, dos de las cinco disposiciones adicionales se destinan a modificar la Ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera, con dos pretensiones: cumplimentar el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Islas Baleares de 10 de noviembre de 2023, publicado en el BOE n.º 298, de 14 de diciembre de 2023, en relación a la Ley 3/2023; y ajustar la Ley 3/2023 al artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que exige que la transferencia se haga en Comisión Mixta de Transferencias, así como se precisa la compatibilidad con el régimen de algunas competencias de diferentes Consejerías del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

2.2. Ley en debate parlamentario.

En las fechas en que se cerraba la edición del primer semestre de la RCDA, se aprobaba y publicaba el Decreto-ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, que, en algunos aspectos, aborda la materia ambiental. Una de las medidas de simplificación ha sido, precisamente, la disolución de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears. Esta supresión de la Comisión de Medio Ambiente da paso a una configuración como órgano ambiental unipersonal, y la motivación usada ha sido «para garantizar una tramitación más ágil de los procedimientos». El legislador afirma que tal supresión no supone en ningún caso la reducción de la

protección ambiental en las Illes Balears ya que se seguirán solicitando los informes de impacto ambiental previstos en la normativa, aunque de la lectura del texto se aprecia una ampliación de supuestos excluidos de evaluación y la desaparición del debate que surgía en sede de la Comisión y los sub-comités existentes.

Por otra parte, en materia del mar, el ciclo del agua y recursos hídricos, el decreto ley considera de extraordinaria y urgente necesidad la eliminación de la petición preceptiva de determinados informes para que la simplificación administrativa pretendida tenga efectos inmediatos. Cabe destacar, en la misma línea simplificadora, la necesaria regulación de las actividades y usos del suelo en la zona de policía no sujetos a autorización de la Administración; de las zonas inundables y áreas de prevención de riesgo de inundación; de las autorizaciones al dominio público marítimo-terrestre para acontecimientos de interés general con repercusión turística y para obras, usos y actividades en tramos urbanos de playas; y la autorización o declaración responsable para usos y actividades en la zona de servidumbre de protección de costas. En materia de energías renovables también se adoptan varias medidas para reducir las trabas burocráticas (con una importante simplificación en proyectos de transición energética).

Igualmente, el Decreto-ley 3/2024 procedió a la derogación de los artículos 4 y 5 del Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, con lo que se recupera la posibilidad de edificar en suelo rústico en aquellas zonas afectadas por las diferentes Áreas de Prevención de Riesgo (APR), que impedían la construcción de viviendas en zonas inundables, de riesgo de incendios, de riesgo de erosión y de desprendimientos (riesgos geológicos). No obstante, esta derogación solamente afecta en la práctica a las islas de Eivissa y de Formentera, ya que, en el caso de Menorca, con carácter general, no se permite la construcción de viviendas en suelo rústico, y en el caso de Mallorca existe la previsión de la Norma 19.3.b), no modificada ni derogada expresamente, que mantiene su redacción en los términos siguientes: «No se pueden ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas en las Áreas de Prevención de Riesgos (APR) de erosión, de desprendimiento, de incendio o de inundación a menos que estén

vinculadas a explotaciones agropecuarias, de acuerdo a lo establecido en el art. 4 del DL 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears». La derogación del artículo 4 del DL 9/2020, implica que pasa regir de nuevo el régimen de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial (DOT), que, a su vez, son desplegadas por el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM). Así, debe tenerse en cuenta que el PTIM, en desarrollo de las DOT, puede ser más restrictivo y adoptar medidas adicionales de protección. Al desaparecer el artículo 4 del DL 9/2020, no desaparece el resto de la redacción de la Norma 19.3.b), que es autónoma en su parte substantiva y en ejercicio de competencias propias del Consell Insular en materia de ordenación del territorio. No rige aquí ningún principio de jerarquía normativa por dos motivos: el primero es que para poder regir este principio haría falta que una norma de rango superior, contradijera otra de rango inferior, y no es el caso, dado que el artículo 4 del DL 9/2020 no ha sido substituido por ninguna otra norma con rango de Ley, simplemente ha desaparecido del mundo jurídico; es segundo motivo es que no existe una remisión a una norma en blanco, ya que la Norma 19.3.b) no realiza una remisión pura o completa, sino una simple citación *in fine* que tampoco queda claro si se refiere solamente al inciso final o a toda la norma, con todo, todo esto es irrelevante dado que al desarrollar las DOT, la norma tiene carácter autónomo e independiente de lo que pueda haber derogado el DL 3/2024.

Finalmente, se deja constancia del hecho que, al momento de redactarse esta crónica, este Decreto-ley 3/2024 se está tramitando en el Parlamento como Ley, en la que se están introduciendo una serie de modificaciones que ya tendremos oportunidad de comentar en el próximo número de la RCDA.

III. POLÍTICA DE ESPACIOS NATURALES

3.1. Proyectos de ordenación de espacios naturales que decaen.

El inicio de la nueva legislatura supuso también el abandonar una serie de tramitaciones de ordenación de espacios naturales protegidos que se han dejado caducar, probablemente por el mero hecho de proceder de un equipo de gobierno anterior con criterios y sensibilidades diferentes. Aunque las

razones de oportunidad permitirían esta actuación, los procedimientos administrativos deben seguir el impulso correspondiente tendente a finalizar los expedientes en curso y no deberían dejarse caducar sin más, porque ello implica una renuncia a potestades administrativas y a la contravención de las reglas de tramitación administrativa previstas en la legislación en materia de procedimiento administrativo común.

La consecuencia final es que han decaído por caducidad los siguientes instrumentos en tramitación:

- Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales de la Costa de Poniente de la isla de Mallorca y se declara el Parque Natural de la Costa de Poniente de la isla de Mallorca.
- Proyecto de decreto del Plano rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

3.2. Nuevos instrumentos de ordenación en proceso de elaboración y tramitación.

Por otro lado, en estos momentos se encuentran en tramitación una serie de instrumentos de ordenación y de gestión de diferentes espacios naturales protegidos de las islas. Concretamente se ha iniciado la tramitación de los planes siguientes.

Planes de ordenación de los recursos naturales:

- Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Tramuntana.
- Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera.

Planes rectores de uso y gestión:

- Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana, el Plan Específico de Protección del Monumento Natural de Les Fonts

Ufanes y el Plan Específico de Protección del Monumento Natural del Torrent de Pareis

- Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera

IV. OTRAS POLÍTICAS AMBIENTALES

4.1. Políticas de aguas y litoral.

En lo relativo a otras políticas en materia ambiental, podríamos destacar el hecho de que se está tramitando un proyecto de Decreto por el cual se aprueba el Plan Especial de Sequía de las Islas Baleares. Esta disposición normativa tendría como objeto genérico minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de situaciones de sequía eventual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 97 del Real Decreto 49/2023, de 24 de febrero, mediante el cual se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares.

Es evidente que los efectos del cambio climático, con períodos de sequía más pronunciados y anomalías térmicas o de episodios más frecuentes de tormentas muy dañinas, requiere afrontar la redacción de planes de resiliencia, entre los que deberemos contemplar una mejor adaptación a un nuevo paradigma del clima, protegiendo el territorio y sus residentes, a la par que las actividades económicas, de las eventualidades a las que deberemos enfrentarnos en un futuro.

Al momento de redactarse esta crónica se había concluido la fase de consulta previa del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4.2. Actividades contaminantes.

En otro orden de cosas, con la finalidad de desarrollar reglamentariamente las competencias otorgadas a la comunidad autónoma por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, así como por el Real Decreto 100/2011 de desarrollo de la Ley 34/2007 y de actualización del anexo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA),

por el Real Decreto 1042/2017 (instalaciones de combustión medias), como también por el Real Decreto 117/2003 (emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes) y resto de normativa sobre emisiones a la atmósfera, se está tramitando un proyecto de decreto regulador del régimen de intervención administrativa de las instalaciones donde se desarrollan APCA.

Según detalla la memoria del proyecto de decreto, su objeto principal sería:

Detallar el procedimiento de autorización y de notificación de instalaciones donde se desarrollan APCA, con los formatos, modelos y documentación a aportar por parte de las personas titulares, dando seguridad jurídica a los modelos, documentos y guías colgados en la página web del Servicio de Cambio Climático y Atmósfera.

Concretar las obligaciones de las personas titulares de las instalaciones: mantener un registro de emisiones, controles de emisiones, incidencias y otras operaciones realizadas a la instalación; indicar la periodicidad de los controles externos y autocontroles de los contaminantes a evaluar; indicar las obligaciones en cuanto a comunicación periódica de información a la administración de la comunidad autónoma sobre instalaciones para ser enviada a la Comisión europea.

Por otra parte, el proyecto de decreto se halla en un avanzado estado de tramitación, con el dictamen del Consejo Consultivo de las Islas Baleares ya emitido, con o que en breve será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

4.3. Cambio climático y energía.

El Plan de Transición Energética y Cambio Climático constituye el marco integrado y transversal de ordenación y planificación de objetivos, políticas y acciones que permitirán cumplir con las finalidades de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. Este plan inició su andadura a finales de la anterior legislatura (2023) y ya ha superado el trámite de inicio del procedimiento y la consulta pública previa del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas, por medio de su difusión en la página web de Participación Ciudadana del Gobierno de las Illes Balears.

Los contenidos del plan se encuentran en un estado muy inicial de elaboración, con lo que no es posible adelantar mucha más información, aunque por la importancia del tema seguramente nos ocupará un capítulo propio en una futura crónica de la revista.

4.4. Gestión forestal.

En materia de incendios forestales, la Dirección General de Medio natural y Gestión Forestal ha aprobado la Orden 10/2024 por la cual se aprueba el Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por el año 2024 (*Boletín Oficial de las Illes Balears* de día 28 de marzo de 2024).

Esta disposición normativa tiene por objeto dar cumplimiento en el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada recientemente por el Real decreto ley 15/2022, de 1 de agosto, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, que prevé que las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales tienen que elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, la vigilancia y la extinción de incendios forestales.

SUMARI: I. INTRODUCCIÓ. II. ACTIVITAT LEGISLATIVA. 2.1. Projectes de llei en procés d'elaboració. 2.2. Llei en debat parlamentari. III. POLÍTICA D'ESPAYS NATURALS. 3.1. Projectes d'ordenació d'espais naturals que decauen. 3.2. Nous instruments d'ordenació en procés d'elaboració i tramitació. IV. ALTRES POLÍTIQUES AMBIENTALS. 4.1. Polítiques d'aigües i litoral. 4.2. Activitats contaminants. 4.3. Canvi climàtic i energia. 4.4. Gestió forestal.

I. INTRODUCCIÓ

El passat estiu han aflorat alguns problemes de rerefons social derivats del model econòmic balear basat en el monocultiu turístic de masses. Els impactes sobre la quotidianitat dels habitants de les illes, que es veu alterada per la dificultat de convivència amb un ecosistema econòmic que requereix batre any rere any nous records de visitants, comença a asfixiar el resident. Igualment, ja és una constatació l'impacte del turisme que ens empobreix, dificultant l'accés a un habitatge digne en condicions econòmiques assumibles. D'altra banda, comença a qüestionar-se la viabilitat d'una normal convivència amb la massificació i la saturació de l'entorn quotidià, l'impacte sobre el cost de la vida i sobre el nostre medi i els seus recursos. De la mateixa manera, s'està evidenciant la insuficiència d'infraestructures, atès que el seu nivell de servei comença a ser escandalosament baix, amb vies de comunicació insuficients, manca d'una xarxa de transport públic eficient, depuradores que es desborden o la qualitat l'aigua de consum humà que es troba en molts casos fora de l'aptitud per a tal consum. Tots aquests problemes acumulats han disparat la sensació que alguna cosa no funciona amb aquest model de monocultiu turístic, que empobreix la població resident, amb un impacte negatiu sobre el producte interior brut (PIB) per habitant i una disminució del salari mitjà i una precarització a llarg termini, on, a més, es dispara el nombre de persones que es troben al llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social.

S'ha parlat de *turismofòbia*, quan el malestar no s'ha projectat contra el turista sinó contra la incapacitat dels successius governs per diversificar l'economia i controlar la sagnia de joves que, decebuts i sense futur, emigren a la recerca d'oportunitats adequades a les seves capacitacions.

A totes les illes s'han succeït diverses accions populars i manifestacions, tant a Menorca com a Mallorca o Eivissa, amb dues concentracions massives a Palma en les quals desenes de milers de persones projectaven el seu malestar i reclamaven el tan anhelat canvi de model econòmic que hauria d'acabar amb l'obsolescència del monocultiu turístic en un món cada vegada més globalitzat i tecnificat, en unes illes en què gairebé tot s'aposta a la casella del sector serveis amb el turisme a l'eix del sistema.

Les mobilitzacions contra la saturació turística i a favor del decreixement no han fet més que començar, mentre que la Taula pel Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, no està mostrant una utilitat pràctica real ni s'espera que la tingui, tal com denuncien el Fòrum de la Societat Civil i les entitats ecologistes de les illes, com el GOB o Amics de la Terra.

En aquest context, les respostes a aquests problemes només semblen venir d'uns textos que retrocedeixen quant a la protecció i conservació ambiental: com l'avantprojecte de llei de gestió integral del litoral de les Illes Balears, l'avantprojecte de nova llei agrària o el Decret Llei 3/2024, de 24 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears, que es tramita ara com a projecte de llei al Parlament de les Illes Balears.

L'horitzó del nostre futur proper planteja una incertesa representada per l'abandonament de mesures de protecció ambiental que, com veurem en el cas de la protecció d'espais naturals, tot apunta a una relaxació normativa en els diferents plans d'ordenació i de gestió; precisament, les mesures de desprotecció territorial, probablement, siguin les més cridaneres, com anirem veient al llarg de les pàgines d'aquesta crònica, que passem a desgranar amb més detall.

II. ACTIVITAT LEGISLATIVA

2.1. Projectes de llei en procés d'elaboració.

En matèria ambiental o incident amb aquesta, es troben en tramitació diferents propostes de textos normatius. La primera d'elles seria *l'avantprojecte de llei agrària de les Illes Balears*, que es va exposar al públic en fase de consulta pública prèvia entre l'1 d'agost de 2024 i l'1 d'octubre de 2024.

La memòria justificativa de la iniciativa exposa que amb aquest nou text es pretén instrumentalitzar l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, agroalimentari i forestal, i el desenvolupament rural de les Illes Balears, des del reconeixement del seu caràcter estratègic i multifuncional, en el marc de la política agrària comuna europea i la legislació de l'Estat. Igualment, entre els objectius de la proposta es trobarien: preveure un règim ordenat i clar dels drets i les obligacions del sector agrari insular; reconèixer el caràcter estratègic de l'activitat agrària, atribuint-li la importància que ha de tenir no només com a activitat productiva sinó també des dels vessants social, territorial, paisatgístic, mediambiental i cultural; i preveure el seu caràcter d'activitat econòmica, per la

qual cosa ha de tenir garantides la rendibilitat, la viabilitat i la continuïtat en el temps.

De la memòria es pot destacar l'objectiu de «projectar una millora agrària a les nostres Illes Balears mitjançant la promoció d'inversions en el desenvolupament de tècniques agràries sostenibles, infraestructures rurals, sistemes d'aprofitament d'aigua i organització del mercat local, entre altres d'altres iniciatives tendents a la programació d'una activitat agrària més sostenible, amb la contribució de programes d'investigació i tecnologia».

La sostenibilitat proposada s'arrela en la triple dimensió de la mateixa: la social, l'econòmica i l'ambiental, la qual cosa s'objectiva sota la proposta d'assolir una activitat agrària rendible, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. No obstant això, del llistat d'objectius, es prioritzen més els de caràcter econòmic i social que els que podrien tenir dimensió ambiental. Per extreure'n alguns que il·lustren l'anterior afirmació es podrien destacar els següents:

- Contribuir al desenvolupament ordenat de l'economia, consumint, l'agricultura, productes de la indústria, i facilitant que les produccions agràries locals tinguin presència en les altres activitats econòmiques que es desenvolupen a les nostres Illes Balears.
- Afavorir i garantir la rendibilitat de l'activitat agrària, amb la generació d'ingressos conseqüent que contribueixi a l'elevació del nivell de vida de les persones que es dediquen, i, per tant, donar estabilitat, continuïtat i futur a l'empresa agrària.
- Potenciar les sinergies entre el sector turístic i l'activitat agrària, de manera que les produccions agràries de les illes tinguin garantida una quota de mercat en l'activitat turística.
- Consolidar i millorar l'ocupació dels agents consagrats a l'activitat agrària, mitjançant els mecanismes d'instrucció, formació, assistència tècnica i foment de l'associacionisme professional.
- Arbitrar els mecanismes que permetin les activitats complementàries, sense oblidar l'activitat agrària com a eix principal de l'activitat, que complementin les rendes agràries i garanteixin la viabilitat i la continuïtat de l'activitat agrària.
- Assegurar que les explotacions agràries de les Illes Balears tenen a l'abast totes les oportunitats de negoci que els reconeix la normativa comunitària.

La segona iniciativa legislativa a destacar seria la del *projecte de llei de gestió integral del litoral de les Illes Balears*, que ha superat el tràmit d'exposició

pública, i que compta amb un esborrany del projecte de llei. En el tràmit ja s'ha publicat la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu de tal manera que un cop aprovat com a projecte serà tramès davant el Parlament per a la seva tramitació.

En l'exposició de motius del projecte, ja es destaca la importància de les costes al nostre país i, més concretament, a l'arxipèlag, que compta amb 937 quilòmetres de costa. Aquesta importància és multidimensional, ja que compta amb perspectives diverses que van des de l'interès econòmic, al militar, passant pel paper ecològic d'aquestes. En el cas de les Illes Balears, el fenomen turístic afegeix una variable pel que fa al valor de la costa: els terrenys costaners adquireixen un especial valor en associar-se el turisme amb el sol i la platja.

L'exposició de motius ens recorda que el Reial decret 994/2022, de 29 de novembre, estableix que es traspassen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un conjunt de funcions i serveis en matèria d'ordenació i gestió del litoral que venia desenvolupant l'Administració de l'Estat, consistents en: autoritzacions d'usos de temporada a les platges i al mar territorial, autoritzacions d'activitats en què concorrin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat, autoritzacions d'ocupació del domini públic marítimo-terrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles, la gestió i atorgament d'autoritzacions a la zona de servitud de trànsit i accés al mar, així com la gestió de les concessions demaniales, i la planificació, elaboració i aprovació de projectes, gestió i execució d'obres i actuacions que no siguin d'interès general de l'Estat.

Per tot això, és raonable que un cop produït el traspàs procedeixi l'aprovació d'una llei d'ordenació i gestió integral del litoral de les Illes Balears que, reculli les previsions constitucionals i estatutàries, així com les assenyalades en el Reial decret 994/2022, i que regulin la protecció, l'ordenació i la gestió del litoral de les Illes Balears, amb les particularitats i especialitats que siguin legalment aplicables.

Pel que fa al contingut, l'esborrany del projecte de llei compta amb 69 articles, cinc disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria (que afecta la Llei 3/2023, de Menorca Reserva de la Biosfera), i tres disposicions finals.

El títol preliminar, relatiu a les disposicions generals, aborda, en el seu capítol I, l'objecte de la llei, que no és altre que regular l'ordenació, protecció i gestió

integral del litoral de les Illes Balears, i es refereix al seu àmbit d'aplicació que comprèn, en l'àmbit terrestre, el domini públic, les diferents servituds i la zona d'influència; i en l'àmbit marí, no només la zona marítima de bany sinó també les aigües costaneres definides en la legislació estatal d'aigües i el límit exterior del mar territorial. En el seu capítol II, es regulen de manera ordenada els principis de l'ordenació i gestió del litoral, en l'àmbit de les relacions interadministratives, així com els principis de gestió integrada del litoral, enfocament ecosistèmic, incloent-hi els principis comunitaris en matèria de política ambiental, d'accés a la informació, transparència i participació i el de protecció del patrimoni litoral tradicional.

El títol I, aborda els principis generals i les directrius de coordinació en matèria d'ordenació del litoral, incloent-hi els instruments d'ordenació del litoral, i s'estructura en sis capítols, que regulen des dels principis generals i directrius de coordinació en matèria d'ordenació del litoral fins als diferents instruments d'ordenació del litoral i els criteris i directrius generals de distribució i explotació de les activitats i serveis de temporada en el domini públic marítimo-terrestre. Igualment es regulen els Plans d'Ordenació de Litoral; referint-se al seu objecte, naturalesa jurídica, àmbit territorial i contingut material mínim, assenyalant que la seva naturalesa jurídica és la dels plans directors sectorials previstos i regulats en la legislació d'ordenació territorial i que el seu àmbit serà insular llevat que el Consell Insular estimi que procedeix un altre àmbit.

El títol II, tracta el Patrimoni litoral, regulant el que s'ha denominat patrimoni litoral tradicional, així com el patrimoni litoral autonòmic. Mentre que el títol III té per objecte la Planificació, elaboració, aprovació, gestió i execució d'obres al litoral de les Illes Balears, i distingeix les obres d'interès general de l'Estat, les obres que no són d'interès general de l'Estat i les obres de competència conjunta de l'Administració de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El títol IV s'articula en cinc capítols, que tracten el règim general d'ús i utilització del litoral, establint uns criteris generals i la distinció de diferents usos, garantint l'accés a la informació pública, transparència i participació ciutadana, preveient el rescat, revocació i modificació de concessions i autoritzacions. Igualment, s'aborda la catalogació de les Platges, distingint entre els trams de platges urbanes i naturals, així com les periurbanes i de protecció especial, a més del règim d'ocupació i ús del domini públic marítimo-terrestre. Finalment, en aquest títol, també es regulen les activitats i ocupacions subjectes a autorització

administrativa, d'acord amb la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i el Reial decret 994/2022.

El títol V, tracta del règim economicofinancer en el domini públic marítimo-terrestre, i conté tres previsions: la primera relativa al que la Comunitat Autònoma pot crear el cànon autonòmic per explotació d' activitats lucratives en el demani que han estat objecte de concessió o autorització; la segona relativa a les taxes que es regularan per la legislació sobre règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma i; la tercera la que concerneix el règim econòmic de la prestació de serveis de temporada en el domini públic marítimo-terrestre.

El títol VI, estableix que l'ordenació i gestió del litoral és una competència compartida entre el Govern i Administració de la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i els Municipis. Finalment, el títol VII desenvolupa la potestat sancionadora, regulant la inspecció del litoral, amb les competències de les diferents administracions públiques i dels funcionaris amb competències inspectores i a les seves facultats, els òrgans competents per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Com afirma l'exposició de motius, la llei inclou tres disposicions transitòries relatives a les atribucions i funcions de la conselleria competent en matèria de costes i litoral del Govern de les Illes Balears, en relació a l'ordenació del litoral, fins que no es duguin a terme, d'acord amb l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, les transferències efectives als Consells Insulars, a través de la Comissió Mixta de Transferències. En segon lloc, es preveu la catalogació provisional de les platges, i finalment, el règim transitori relatiu a la vigència de disposicions reglamentàries fins que no es produeixi la transferència efectiva de competències als Consells Insulars en matèria d'ordenació del litoral i fins que, un cop transferides efectivament, els Consells Insulars aprovin els Instruments d'ordenació del litoral, com són els plans d'ordenació del litoral i plans d'activitats i serveis de temporada en domini públic marítimo-terrestre.

Igualment, com s'ha avançat en la introducció, dues de les cinc disposicions addicionals es destinen a modificar la Llei 3/2023, de 17 de febrer, de Menorca Reserva de Biosfera, amb dues pretensions: complir l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma d'Illes Balears de 10 de novembre de 2023, publicat al BOE nº 298, de 14 de desembre de 2023, en relació a la Llei 3/2023; i ajustar la Llei 3/2023 a l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que exigeix que la transferència es faci en Comissió Mixta de Transferències, així com cal la

compatibilitat amb el règim d'algunes competències de diferents Conselleries del Govern i Administració de la Comunitat Autònoma.

2.2. Llei en debat parlamentari.

En les dates en què es tancava l'edició del primer semestre de la RCDA, s'aprova i publicava el Decret Llei 3/2024, de 24 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears, que, en alguns aspectes, aborda la matèria ambiental. Una de les mesures de simplificació ha estat, precisament, la dissolució de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Aquesta supressió de la Comissió de Medi Ambient dona pas a una configuració com a òrgan ambiental unipersonal, i la motivació usada ha estat «per garantir una tramitació més àgil dels procediments». El legislador afirma que aquesta supressió no suposa en cap cas la reducció de la protecció ambiental a les Illes Balears ja que se seguiran demanant els informes d'impacte ambiental previstos en la normativa, tot i que de la lectura del text s'aprecia una ampliació de supòsits exclosos d'avaluació i la desaparició del debat que sorgia en seu de la Comissió i els sub-comitès existents.

D'altra banda, en matèria del mar, el cicle de l'aigua i recursos hídrics, el decret Llei considera d'extraordinària i urgent necessitat l'eliminació de la petició preceptiva de determinats informes perquè la simplificació administrativa pretesa tingui efectes immediats. Cal destacar, en la mateixa línia simplificadora, la necessària regulació de les activitats i usos del sòl en la zona de policia no subjectes a autorització de l'Administració; de les zones inundables i àrees de prevenció de risc d'inundació; de les autoritzacions al domini públic marítimo-terrestre per a esdeveniments d'interès general amb repercussió turística i per a obres, usos i activitats en trams urbans de platges; i l'autorització o declaració responsable per a usos i activitats en la zona de servitud de protecció de costes. En matèria d'energies renovables també s'adopten diverses mesures per reduir les traves burocràtiques (amb una important simplificació en projectes de transició energètica).

Igualment, el Decret Llei 3/2024 va procedir a la derogació dels articles 4 i 5 del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, amb el que es recupera la possibilitat d'edificar en sòl rústic en aquelles zones afectades per les diferents Àrees de Prevenció de Risc (APR), que impedièen la construcció d'habitatges en zones inundables, de risc d'incendis, de risc d'erosió i de desprendiments (riscos geològics). No obstant

això, aquesta derogació solament afecta en la pràctica a les illes d'Eivissa i de Formentera, ja que, en el cas de Menorca, amb caràcter general, no es permet la construcció d'habitatges en sòl rústic, i en el cas de Mallorca existeix la previsió de la Norma 19.3.b), no modificada ni derogada expressament, que manté la seva redacció en els termes següents: «No es poden situar nous habitatges unifamiliars aïllades en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR) d'erosió, de desprendiment, d'incendi o d'inundació tret que estiguin vinculades a explotacions agropecuàries, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 4 del DL 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears». La derogació de l'article 4 del DL 9/2020, implica que passa regir de nou el règim de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial (DOT), que, al seu torn, són desplegades pel Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM). Així, ha de tenir-se en compte que el PTIM, en desenvolupament de les DOT, pot ser més restrictiu i adoptar mesures addicionals de protecció. En desaparèixer l'article 4 del DL 9/2020, no desapareix la resta de la redacció de la Norma 19.3.b), que és autònoma en la seva part substantiva i en exercici de competències pròpies del Consell Insular en matèria d'ordenació del territori. No regeix aquí cap principi de jerarquia normativa per dos motius: el primer és que per a poder regir aquest principi faria falta que una norma de rang superior, contradigués una altra de rang inferior, i no és el cas, atès que l'article 4 del DL 9/2020 no ha estat substituït per cap altra norma amb rang de Llei, simplement ha desaparegut del món jurídic; el segon motiu és que no existeix una remissió a una norma en blanc, ja que la Norma 19.3.b) no realitza una remissió pura o completa, sinó una simple citació *in fine* que tampoc queda clar si es refereix solament a l'incís final o a tota la norma, amb tot, tot això és irrellevant atès que en desenvolupar les DOT, la norma té caràcter autònom i independent del que pugui haver derogat el DL 3/2024.

Finalment, es deixa constància del fet que, en el moment de redactar-se aquesta crònica, aquest Decret Llei 3/2024 s'està tramitant al Parlament com a Llei, en la qual s'estan introduint una sèrie de modificacions que ja tindrem oportunitat de comentar en el proper número de la RCDA.

III. POLÍTICA D'ESPAYS NATURALS

3.1. Projectes d'ordenació d'espais naturals que decauen.

L'inici de la nova legislatura va suposar també l'abandonament d'una sèrie de tramitacions d'ordenació d'espais naturals protegits que s'han deixat caducar,

probablement pel sol fet de procedir d'un equip de govern anterior amb criteris i sensibilitats diferents. Tot i que les raons d'oportunitat permetrien aquesta actuació, els procediments administratius han de seguir l'impuls corresponent tendent a finalitzar els expedients en curs i no s'haurien de deixar caducar sense més, perquè això implica una renúncia a potestats administratives i a la contravenció de les regles de tramitació administrativa previstes en la legislació en matèria de procediment administratiu comú.

La conseqüència final és que han decaigut per caducitat els instruments següents en tramitació:

- Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l'illa de Mallorca i es declara el Parc Natural de la Costa de Ponent de l'illa de Mallorca.
- Projecte de decret del Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

3.2. Nous instruments d'ordenació en procés d'elaboració i tramitació.

D'altra banda, en aquests moments es troben en tramitació una sèrie d'instruments d'ordenació i de gestió de diferents espais naturals protegits de les illes. Concretament s'ha iniciat la tramitació dels plans següents.

Plans d'ordenació dels recursos naturals:

- Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana.
- Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Plans rectors d'ús i gestió:

- Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, el Pla Específic de Protecció del Monument Natural de les Fonts Ufanès i el Pla Específic de Protecció del Monument Natural del Torrent de Pareis
- Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera

IV. ALTRES POLÍTIQUES AMBIENTALS

4.1. Polítiques d'aigües i litoral.

Pel que fa a altres polítiques en matèria ambiental, podríem destacar el fet que s'està tramitant un projecte de Decret pel qual s'aprova el Pla Especial de Sequera de les Illes Balears. Aquesta disposició normativa tindria com a objecte genèric minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials de situacions de sequera eventual, d'acord amb el que disposa l'article 97 del Reial decret 49/2023, de 24 de febrer, mitjançant el qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

És evident que els efectes del canvi climàtic, amb períodes de sequera més pronunciats i anomalies tèrmiques o d'episodis més freqüents de tempestes molt danyoses, requereix afrontar la redacció de plans de resiliència, entre els quals haurem de contemplar una millor adaptació a un nou paradigma del clima, protegint el territori i els seus residents, a la qual les activitats econòmiques, de les eventualitats a les quals haurem d'enfrontar-nos en un futur.

En el moment de redactar-se aquesta crònica s'havia conclòs la fase de consulta prèvia de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.2. Activitats contaminants.

En un altre ordre de coses, amb la finalitat de desenvolupar reglamentàriament les competències atorgades a la comunitat autònoma per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, així com pel Reial decret 100/2011 de desenvolupament de la Llei 34/2007 i d'actualització de l'annex d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA), pel Reial decret 1042/2017 (instal·lacions de combustió mitjanes), com també pel Reial decret 117/2003 (emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents) i resta de normativa sobre emissions a l'atmosfera, s'està tramitant un projecte de decret regulador del règim d'intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen APCA.

Segons detalla la memòria del projecte de decret, el seu objecte principal seria:

Detallar el procediment d'autorització i de notificació d'instal·lacions on es desenvolupen APCA, amb els formats, models i documentació a aportar per part de les persones titulars, donant seguretat jurídica als

models, documents i guies penjats en la pàgina web del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera.

Concretar les obligacions de les persones titulars de les instal·lacions: mantenir un registre d'emissions, controls d'emissions, incidències i altres operacions realitzades a la instal·lació; indicar la periodicitat dels controls externs i autocontrols dels contaminants a avaluar; indicar les obligacions quant a comunicació periòdica d'informació a l'administració de la comunitat autònoma sobre instal·lacions per a ser enviada a la Comissió europea.

D'altra banda, el projecte de decret es troba en un avançat estat de tramitació, amb el dictamen del Consell Consultiu de les illes Balears ja emès, amb o que en breu serà aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma.

4.3. Canvi climàtic i energia.

El Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic constitueix el marc integrat i transversal d'ordenació i planificació d'objectius, polítiques i accions que permetran complir amb les finalitats de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Aquest pla va iniciar la seva marxa a la fi de l'anterior legislatura (2023) i ja ha superat el tràmit d'inici del procediment i la consulta pública prèvia de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, per mitjà de la seva difusió en la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Els continguts del pla es troben en un estat molt inicial d'elaboració, amb el que no és possible avançar molta més informació, encara que per la importància del tema segurament ens ocuparà un capítol propi en una futura crònica de la revista.

4.4. Gestió forestal.

En matèria d'incendis forestals, la Direcció General de Medi natural i Gestió Forestal ha aprovat l'Ordre 10/2024 per la qual s'aprova el Pla Anual de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per l'any 2024 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 28 de març de 2024).

Aquesta disposició normativa té per objecte donar compliment en l'article 48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, modificada recentment pel

Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, que preveu que les comunitats autònomes davant el risc general d'incendis forestals han d'elaborar i aprovar plans anuals per a la prevenció, la vigilància i l'extinció d'incendis forestals.